

Reconocimiento de la paternidad

**“EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES LEGALES, FRENTE A LA AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE
PATERNIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”**

**CLAUDIA LORENA LOPEZ RAVE
HOLANDA ELIZABETH MONTOYA DE HERRERA
CLAUDIA MILENA RIVERA ÀREVALO**

**UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA
PEREIRA**

2011

**“EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES LEGALES, FRENTE A LA AUSENCIA DE RECONOCIMIENTO DE
PATERNIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑA Y ADOLESCENTE”**

**CLAUDIA LORENA LOPEZ RAVE
HOLANDA ELIZABETH MONTOYA DE HERRERA
CLAUDIA MILENA RIVERA ÀREVALO**

**“Proyecto de grado como requisito para optar por el título de Especialista en
Derecho de Familia”**

**UNIVERSIDAD LIBRE, SECCIONAL PEREIRA
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA
PEREIRA
2011**

INTRODUCCIÓN

La legislación colombiana ha determinado la importancia del reconocimiento de la paternidad y las presunciones que sobre el particular se dan, empezando por el artículo 213 del C.C, modificado por el artículo 1º de la ley 1060 de 2006, que dispone:” *El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad*”.

Se tiene entonces, que este derecho para los menores se convierte en un derecho fundamentalísimo que requiere ser protegido por el Estado, ya que encuentra vinculación directa con la identidad personal y el nombre del menor, allí la importancia de analizar desde la academia la efectividad de las acciones legales y los procedimientos investigativos para el reconocimiento de la paternidad.

Así pues el presente trabajo pretende desarrollar el marco general y conceptual sobre la filiación, para analizar posteriormente las implicaciones socio-jurídicas del reconocimiento de la paternidad, permitiendo ello analizar finalmente la eficiencia del sistema jurídico colombiano frente al fenómeno estudiado.

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La negativa al reconocimiento de paternidad de los niños, niñas y adolescentes, obedece a múltiples factores de todo orden, entre ellos podríamos citar: la falta de oportunidades laborales del padre, falta de planificación familiar, bajo nivel educativo del padre o ausencia total del mismo, factores de tipo económico, cultural y religioso, promiscuidad, idiosincrasia, problemas de desarraigo familiar, negativa a efectuar el reconocimiento, muerte del presunto padre, descomposición del tejido social y familiar, al igual que la infidelidad. Como consecuencia de ello, observamos un alto grado de menores dedicados a la mendicidad, baja autoestima, abandono en las calles, vulneración de sus derechos fundamentales, desajustes emocionales, desórdenes psicológicos, falta de normas de conducta por parte de los padres, insuficiente satisfacción de sus necesidades básicas y un alto grado de descomposición social que genera prejuicios sociales y familiares.

Teniendo en cuenta lo anterior el problema de investigación que pretende resolver el presente trabajo de grado es: ¿Cuáles son los factores sociales, económicos y jurídicos que impiden la efectividad de las acciones legales frente a la ausencia de reconocimiento de paternidad de niños, niñas y adolescentes?

2. OBJETIVOS

2.1. *Objetivo General*

- Determinar los factores sociales, económicos y jurídicos, que impiden la efectividad de las acciones legales frente a la ausencia de reconocimiento de paternidad de niños, niñas y adolescentes.

2.2. *Objetivos Específicos*

- Identificar los factores sociales que impiden la efectividad de las acciones legales frente a la ausencia de reconocimiento de paternidad de niños, niñas y adolescentes.
- Establecer los factores económicos que impiden la efectividad de las acciones legales frente a la ausencia de reconocimiento de paternidad de niños, niñas y adolescentes.
- Determinar los factores jurídicos que impiden la efectividad de las acciones legales frente a la ausencia de reconocimiento de paternidad de niños, niñas y adolescentes, niños y adolescentes.

3. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación pretende identificar la problemática social en torno a la falta de reconocimiento de paternidad de niños, niñas y adolescentes, que ha conllevado a una serie de vulneraciones graves en los derechos fundamentales de los niños principalmente en el derecho a tener una familia y en el derecho a su nombre.

Los resultados que arroje esta investigación, pueden ser utilizados por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, en aras de elaborar o proponer políticas públicas de prevención de este problema; promoción y protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, conforme a las disposiciones legales vigentes que resultan un elogio a la bandera cuando es imposible identificar los padres de un menor.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES SOBRE LA FILIACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD

1. LA FILIACIÓN

La filiación en su concepto simple se traduce en el vínculo jurídico que existe entre padres e hijos, vínculo que se ha traducido en derecho fundamental para los niños, niñas y adolescentes, y ha sido ampliamente regulado jurisprudencialmente, se ha entendido que la filiación: “ (...) es un derecho fundamental, porque la liga de manera invariable al estado civil que es uno de los atributos de la personalidad. Como consecuencia de lo anterior, instituye la filiación como uno de estos. Al ser un atributo de la personalidad, se convierte en un derecho fundamental pues el artículo 14 de la Constitución Política establece “Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica”¹

Para algunos tratadistas la filiación, es “una de las notas del Estado de familia, la de mayor jerarquía dentro del parentesco y portadora de las más importantes consecuencias jurídicas. Que los derechos y deberes que de ella resultan conforman el vínculo jurídico que liga al hijo con sus progenitores y, lógicamente, a éstos con aquél”²

En sentencia proferida por la Corte Constitucional hacía el año 1995, se tradujo la filiación y el **reconocimiento de la paternidad** en derechos realmente esenciales para los menores, el tenor de la sentencia es el siguiente:

“La doctrina moderna considera que el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al

¹ IBAÑEZ OTÁLORA, María Fernanda y JIMENEZ FANDIÑO, Sara. “La filiación en la Jurisprudencia Constitucional” Universidad Javeriana de Colombia, Bogotá, 2003. p. 10.

² CABELLO BLANCO, Margarita “Filiación y valoración probatoria de las pruebas de ADN” XXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre, Bogotá. 2007. p. 525.

tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Son los llamados atributos de la personalidad. Por consiguiente, cuando la Constitución consagra el derecho de toda persona natural a ser reconocida como persona jurídica está implícitamente estableciendo que todo ser humano tiene derecho a todos los atributos propios de la personalidad jurídica. Para la Corte Constitucional es claro que la filiación es uno de los atributos de la personalidad jurídica, puesto que ella está indisolublemente ligada al estado civil de la persona. El derecho a la filiación, como elemento integrante del estado civil de las personas, es un atributo de la personalidad, y por ende es un derecho constitucional deducido del derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica”³.

1.1. Clasificación de la filiación

La filiación dentro del derecho de familia se clasifica como matrimonial, extramatrimonial y por adopción.

La primera de ellas la filiación matrimonial comprende a las personas concebidas y nacidos dentro del matrimonio. Se puede hablar en este caso de una filiación legitimada que de conformidad con el artículo 40 del Código civil, es la legitimidad conferida a los hijos por el posterior matrimonio de sus padres.

³ CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-109 de 1995. DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA – Filiación.

Ahora la filiación extramatrimonial, comprende a los menores nacidos fuera del matrimonio de sus padres pero pueden posteriormente ser legitimados cuando acontece el hecho del matrimonio de los mismos. Sobre el particular la Ley 45 de 1936 disponía en términos despectivos lo siguiente: *“El hijo nacido de padres que al tiempo de la concepción no estaban casados entre sí, es hijo natural, cuando ha sido reconocido o declarado con arreglo a lo dispuesto en la presente ley. También se tendrá esta calidad respecto de la madre soltera o viuda por el solo hecho del nacimiento”*.

La calidad de hijo extramatrimonial también la tienen los menores nacidos dentro de la unión marital de hecho declarada y el nacido en los términos de los artículos 213 y 214 del Código Civil, artículos modificados por la Ley 1060 de 2006

Finalmente la filiación adoptiva existe de forma plena como lo estatuye el código de la infancia y la adolescencia, sus efectos es dar lugar al vínculo paterno que se establece entre el adoptante y el adoptado, pero diversos autores sostiene que no sólo crea el vínculo con los adoptantes, sino que en relación con toda la familia de éstos, el adoptado viene a considerarse como nacido dentro del matrimonio⁴.

1.2. Presunción de paternidad y maternidad.

La presunción de paternidad y maternidad se encuentra establecida en el artículo 213 del Código Civil, modificado por el artículo 1º de la Ley 1060 de 2006 que establece: *“El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad”*.

⁴ Sobre el particular: GALINDO GARFIAS, Ignacio. *“Estudios de Derecho Civil”* Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 1981. p. 10

Esta presunción es legal lo que traduce en que admite prueba en contrario, y se encuentra establecida en el artículo 92 del CC que dispone: *“De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla siguiente: Se presume que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en que principie el día del nacimiento”*.

Sobre el particular se ha expresado por parte de la Corte Suprema de Justicia: *“(…) Quiere decir en últimas, que el día del alumbramiento no se incluye en aquél cómputo. En la ocurrencia de autos, entonces, sabiéndose que la demandante nació el 2 de noviembre de 1985, la cuenta hacía atrás parte desde la propia medianoche en que comenzó ese día, la misma que feneció el 1 de noviembre; así las cosas, establecido el cómputo respectivo, los 180 días van desde allí hasta la media noche en que terminando el 5 de mayo, comenzaba simultáneamente el 6. Dicho de otro modo, el día numero 180 va desde la media noche en que termina el 6 de mayo, hacia atrás, hasta la medianoche en que terminó el 5. El caso debatido residió precisamente, en que las relaciones sexuales ocurrieron el 6 de mayo de 1985, pues para este caso solo había 179 días cabales, y por tanto, no se presumía la concepción”⁵*.

Ahora en la actualidad y debido a los avances científicos que existen en la materia, no es complejo para el Juzgador resolver un litigio sobre presunción de paternidad, pues la ciencia a presentado el instrumento idóneo para la investigación en estos casos, siendo la prueba de ADN el material probatorio por excelencia en los casos examinados y siendo consagrada legalmente en las Leyes 721 de 2001 y 1060 de 2006.

No obstante teniendo presente que se habla de una presunción legal, se puede impugnar la paternidad del hijo matrimonial y extramatrimonial y es allí donde juega un

⁵ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Casación de marzo 28 de 1996, M.P.: Rafael Romero Sierra

papel importantísimo la prueba científica, estipulada como se dijo anteriormente como la mejor prueba en el aspecto particular.

Ahora se tiene que la impugnación de la paternidad o la maternidad tienen ciertos ritualismos y procedimientos que maneja el Código Civil, en artículos como el 406 que expresamente dispone: “ *Ni prescripción ni fallo alguno, entre cualesquiera otras personas que se haya pronunciado, podrá oponerse a quien se presente como verdadero padre o madre del que pasa por hijo de otros, o como verdadero hijo del padre o madre que le desconoce*”; situación que viene a ser ratificada en la Ley 1060 de 2006.

2. LA LEGITIMACIÓN

Resulta importante dentro del contexto del presente trabajo determinar los alcances de la legitimación y se encuentra en su concepto primigenio que: “*Comprende las personas concebidas fuera del matrimonio, pero con el matrimonio posterior de sus padres quedan con iguales derechos a los hijos matrimoniales*”⁶. Ahora la legitimación puede ser de dos clases, la denominada ipso jure que no requiere de solemnidad diferente para que el nacido sea legitimado basta con el matrimonio de los padres. Y la segunda clase es la legitimación voluntaria que puede darse en el acta de matrimonio o por escritura pública, siendo preciso puntualizar sobre la última, que:

a). El instrumento publico mediante el cual se hace la legitimación, esto es, escritura pública, registro o partida de matrimonio, debe notificarse al hijo que se legitima.(art 240 C.C). No se indica qué procedimiento ha de seguirse para hacer la notificación, por tanto, deben aplicarse por analogía las clases de notificación consagradas en el Código de Procedimiento civil,

⁶ BENJUMEA, Jairo. “Derecho de Familia. Módulo de Filiación” <http://docs.google.com/viewer>, abril 15 de 2011.

como la personal, por edicto, por aviso, conducta concluyente; lo cual se tendrá que hacer por intermedio de la Notaría o de la autoridad religiosa donde se contrajo el matrimonio.

Si el legitimado es un menor de edad; no es necesario hacer la notificación porque sus mismos padres son sus representantes, pasados noventa días quedan legitimados.

Cuando se trate de personas que necesiten de un curador o de de un tutor, la notificación deberá hacerse a éstos, y si no lo tienen se le designará un curador especial a quien se le hará la notificación (art 240 C.C.).

Si la persona es capaz y no necesita de la designación de tutor o curador para la administración de sus bienes, la notificación se le hace a esa persona. (241 C.C.)

2.- El legitimado deberá manifestar libremente si acepta o repudia la legitimación⁷.

Una vez dejados claros los aspectos generales y conceptuales sobre los vínculos que pueden existir entre menores y sus padres, es procedente entrar a analizar el reconocimiento e investigación de la paternidad y maternidad, punto medular del presente trabajo de investigación.

⁷ **Ibídem.**

CAPÍTULO II

EL RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD

1. ASPECTOS GENERALES

Es importante analizar en este capítulo la trascendencia que tiene el reconocimiento de la paternidad para un menor de edad, lo importante que es en el desarrollo eficiente del derecho a la identidad, siendo un elemento esencial de la protección de la familia en el marco del artículo 42 de la Constitución Política de Colombia.

Así pues de partirse de la base que es la misma Constitución que torna la importancia que representa la familia en la sociedad y le otorga un tratamiento especialísimo que se efectúa por la protección que merece por parte del Estado. Principalmente la familia se constituye en el núcleo esencial de la sociedad y es elevada como un principio fundamental del Estado, de allí las exigencias al mismo por conservarla y protegerla, de allí que para hacer patente todas las formas de protección se haya adoptado en Colombia un concepto de familia amplio, lo que se traduce en considerar esta célula no sólo a la formada entre la unión matrimonial de un hombre y una mujer, sino la formada por vínculos naturales. Sobre el particular la Corte Constitucional ha mencionado que estas formas de conformar la familia: *“no implica discriminación alguna: significa únicamente que la propia Constitución ha reconocido el diverso origen que puede tener la familia⁸”*.

Dentro del marco entonces de la célula fundamental de la sociedad y reiterando su protección aún a sus miembros, es que reiterando lo previsto en el artículo 1º de la Ley 29 de 1982, la Constitución, protege la igualdad entre los hijos denominados matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, así lo establece en el mencionado

⁸ Corte Constitucional. Sentencia C-595 de 1996. FAMILIA - Clasificación

artículo 42 al disponer: “*los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes*”; disposición que según lo ha manifestado la Corte Constitucional es: “*la culminación de un proceso comenzado en 1936, con la ley 45 de ese año, destinado a eliminar las discriminaciones por razones del nacimiento*”⁹.

El ámbito de protección que obedece la familia y que es exigido por la Carta se enmarca dentro del contexto de dos principios constitucionales de importancia radical, el primero de ellos que apunta a la igualdad de derechos y deberes entre la pareja y el respeto dentro de los miembros que la componen.

La familia adicionalmente se constituye en un derecho fundamental del niño, niña o adolescente y ello ha sido ratificado por la Corte Constitucional, al determinar lo siguiente:

“Ahora bien, tal y como lo ha resaltado este Tribunal, la familia, además de constituirse en el eje central de la sociedad y sujeto de protección por parte del Estado, por expreso mandato constitucional, es a su vez un derecho fundamental de los niños y niñas. A este respecto, el artículo 44 de la Carta dispone expresamente que todas las niñas y niños tienen, entre otros, los derechos fundamentales (1) a la vida; (2) a la integridad física; (3) a la salud y la seguridad social; (4) a la alimentación equilibrada; (5) a su nombre y nacionalidad; (6) al cuidado y amor; (7) a la educación; (8) a la libre expresión de su opinión; y “a tener una familia y no ser separado de ella””.

⁹Corte Constitucional. Sentencia C-156 de 1993.

3.4. La jurisprudencia constitucional ha sido consistente en señalar que el carácter fundamental de las garantías reconocidas a los niños y niñas, entre las que se cuenta el derecho “a tener una familia y no ser separado de ella”, se inscribe en el ámbito del principio de protección especial del menor, reconocido por la propia Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos. Sobre este particular, ha explicado que, de tiempo atrás, los niños y niñas han sido proclamados por el derecho como sujetos de especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado, buscando con ello garantizarles un tratamiento preferencial y asegurarles un proceso de formación y desarrollo en condiciones óptimas y adecuadas, acorde con el papel relevante y trascendental que están llamados a cumplir en las sociedades del mundo”¹⁰.

La Corporación ha determinado que el tratamiento especial dado al menor, conlleva a que este se enrute a un “deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como particular en las materias que los involucran”¹¹. En palabras precisas los menores:

“Son considerados como grupo destinatario de una atención especial estatal que se traduce en un tratamiento jurídico proteccionista, respecto de sus derechos y de las garantías previstas para alcanzar su efectividad. Así, logran identificarse como seres reales, autónomos y en proceso de evolución personal, titulares de un interés jurídico superior que irradia todo el ordenamiento jurídico y que, en términos muy generales, consiste en lo siguiente:

¹⁰ Corte Constitucional, Sentencia C-145 de 2010. FAMILIA EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE-Tratamiento y reconocimiento

¹¹ Corte Constitucional, Sentencia C-1064 de 2000. ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Protección del menor

“(…) se trata de un principio de naturaleza constitucional que reconoce a los menores con una caracterización jurídica específica fundada en sus derechos prevalentes y en darles un trato equivalente a esa prelación, en cuya virtud se los proteja de manera especial, se los defienda ante abusos y se les garantice el desarrollo normal y sano por los aspectos físico, psicológico, intelectual y moral, no menos que la correcta evolución de su personalidad (Cfr. sentencias T-408 del 14 de septiembre de 1995 y T-514 del 21 de septiembre de 1998).”.

Dicho interés supremo del menor se revela como un principio, el cual implica una forma de comportamiento determinado, un deber ser, que delimita la actuación tanto estatal como particular en las materias que los involucra, el cual obtiene reconocimiento en el ámbito del ordenamiento jurídico internacional como en el nacional”¹².

Así pues las actuaciones estatales y de la sociedad en general, se encaminan a proteger al menor, haciendo prevalecer en todo caso el deber de asistencia y protección a la población infantil, en procura de garantizar su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, así como sus condiciones de libertad y dignidad¹³.

Internacionalmente los menores se encuentran protegidos por números convenios y tratados internacionales, instaurándose en ellos el denominado principio de interés superior del menor, cuya consagración inicial se dio en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre derechos del niño y consagrado posteriormente en instrumentos internacionales como Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos

¹² **Ibídem**

¹³ **Ibídem.**

Humanos y la Convención Sobre Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989¹⁴; ese interés se traduce en que: *“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.”*

Se tiene entonces que por mandato constitucional en el artículo 44 y por los convenios citados, los postulados básicos de protección del menor deben ajustarse a lo siguientes

“(i) se le impone a la familia, a la sociedad y al Estado la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral; (ii) se establece como principio general que los derechos de los niños prevalecerán sobre los derechos de los demás y que serán considerados fundamentales para todos los efectos, exigiendo privilegiar y asegurar su ejercicio y goce con total plenitud; (iii) se reconoce que los niños son titulares de todos los derechos consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Colombia; y (iv) se ordena proteger a los niños contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”¹⁵.

El desarrollo legislativo del principio de protección del menor de manera especial, se desarrolló legislativamente en las siguientes normas:

- Decreto Extraordinario 2737 de 1989, por el cual se adoptó el Código del Menor.

¹⁴ Esta declaración particularmente fue incorporada al derecho colombiano mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991.

¹⁵ Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2010.

- Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia.

En la Ley como tal se encuentra definido en el artículo 80 cuyo tenor es el siguientes *“se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”*

De los anteriores planteamientos se puede colegir que esa protección instituida además como ya mencionó en el artículo 44 de I CN, conlleva a la protección y asistencia del niño, niña o adolescente, garantizando el desarrollo integral, y en lo que compete al Estado *“a través de la ley, le compete adoptar las medidas pertinentes y necesarias para que dichos fines puedan ser eficazmente cumplidos, así como también crear los mecanismos adecuados al logro de tales propósitos”*¹⁶.

Ahora y aterrizando en el tema objeto de investigación, ha sido la Corte, quien a través de distintos pronunciamientos¹⁷, ha sostenido que uno de los instrumentos a los que ha recurrido el Estado para garantizar el desarrollo armónico e integral del menor, es precisamente la institución de la patria potestad y el reconocimiento de los menores.

2. EL RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

El reconocimiento de hijos extramatrimoniales, de conformidad con la legislación colombiana vigente se puede hacer de cuatro maneras que se encuentran contempladas en la ley 75 de 1968 y en los artículos 82 numeral 10 y 109 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

¹⁶ **Ibídem**

¹⁷ **Sobre el particular: Sentencias T-531 de 1992, T-041 de 1996 y C-997 de 2004.**

Así pues, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 75 de 1968, el reconocimiento se torna irrevocable y procede, en el registro civil de nacimiento con la suscripción de quien reconoce. De igual manera mediante escritura pública y finalmente mediante el testamento, que pese a ser un acto jurídico revocable, es reconocimiento del hijo realizado de esta manera se torna irrevocable y finalmente la cuarta manera es por la manifestación expresa y voluntaria ante juez o notario.

Las maneras de reconocimiento mencionadas anteriormente no conllevan a un litigio, no obstante no significa que éste no se sujete a contiendas, por lo que la Ley ha creado el procedimiento judicial para efectos del reconocimiento del menor, esto es el trámite de la paternidad a través de un procesos contencioso, radicando la competencia en del juez de familia del lugar de residencia del presunto padre.

No obstante lo anterior, el Código de Infancia y Adolescencia, introdujo el reconocimiento voluntario del menor en el artículo 82 numeral 10 donde determina las funciones del la Defensoría de Familia y cuyo texto es: *“Citar al presunto padre con miras al reconocimiento voluntaria del hijo extramatrimonial nacido o que éste por nacer, en caso de producirse, extender el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección el nombre en el registro del estado civil”*. Y por su parte el artículo 109 ibídem determina: *“Cuando el padre extramatrimonial reconozca, ante el defensor, el comisario de familia o el inspector de policía, la paternidad de un niño, niña o un adolescente, se levantará el acta y se ordenará su inscripción ene. Registro del estado civil.”*

2.1. Investigación de la paternidad y maternidad.

El artículo 14 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, lo cual se hace indispensable para que

pueda actuar como sujeto de derechos y de obligaciones, se tiene pues que de la existencia del reconocimiento constitucional a la personalidad jurídica, el Derecho tiene establecido que surgen los atributos de la personalidad y, entre ellos, el del estado civil de las personas. Así púes, la determinación de la situación de la persona en la familia y en la sociedad, encuentra como fuente originaria y principal la condición de hijo. Es por esto que el multimencionado artículo 44 de la Carta advierte como derechos fundamentales de los niños el tener **nombre y nacionalidad**, así como tener una familia: *“Acorde con lo expuesto, la legislación colombiana tiene establecido el derecho de toda persona a saber quiénes son sus progenitores y a establecer su filiación, aún por la vía judicial si fuere necesario”*¹⁸.

En Colombia, como se sabe, la Ley 45 de 1936 autorizó la declaración judicial de la paternidad y, para ello, estableció las causales en las cuales esta se presume, norma que fue reformada luego por el artículo 6º de la Ley 75 de 1968, con el propósito de facilitar que mediante sentencia pueda establecerse la relación paterno filial.

Para analizar puntualmente el reconocimiento de la paternidad y los medios idóneos y eficaces para lograr la misma, es importante analizar nuevamente y sobre doctrinas más reconocidas en el tema lo concerniente a la filiación como derecho fundamental de los menores.

Sobre el particular se rescata que la a filiación se determina cuando el derecho reafirma la realidad biológica que se presume. En la filiación matrimonial y en la originada por una unión marital de hecho, la ley se encarga de establecer su existencia mediante presunciones de carácter legal, que, como tales, admiten prueba en contrario, soportando el hecho base en la existencia del matrimonio, o la unión marital y la ocurrencia de la concepción, ya durante el mismo, ya sea antes de la celebración del

¹⁸ Corte Constitucional, Sentencia C-476 de 2005. DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA – Guarda estrecha relación con el derecho a la igualdad.

rito, pero con nacimiento del hijo dentro de los ciento ochenta días siguientes a dicha celebración, o a la declaración de dicha unión marital; o el caso especial en que hubiere ocurrido la concepción y el nacimiento antes de la celebración del matrimonio, y es legitimado por el posteriormente celebrado entre los padres¹⁹.

La filiación extramatrimonial, contraria a la matrimonial, cuya fuente es el matrimonio o la unión marital de hecho, surge para el hijo nacido sin que sus padres estuvieren casados, en virtud del reconocimiento voluntario que el padre o la madre realicen voluntariamente (sea en el registro civil correspondiente o en virtud de confesión hecha en documento, por escritura pública o por testamento), o por el ejercicio de la acción de reclamación consagrada en forma detallada y taxativa en la propia ley (acción de investigación de la paternidad). De igual forma, la filiación extramatrimonial de la madre respecto al hijo se da, por el hecho del nacimiento de ese hijo estando soltera o viuda.

El Código Civil colombiano no adoptó el sistema prohibitivo Francés en lo que tiene que ver con la investigación de la paternidad, sino que consideró viable el sistema de libertad de investigación; por ello todo hijo extramatrimonial o quien lo tuviera bajo su cuidado, natural en esa época, podía solicitarla, pidiéndole al juez que citara al padre para que, bajo juramento declarara sobre la pretendida paternidad.

No obstante esa libertad, el reconocimiento de paternidad así obtenido en virtud de la citación, sólo producía efectos jurídicos limitados al deber de los padres de cuidar personalmente de sus hijos, atender los gastos de crianza y educación incluyendo la enseñanza primaria y el aprendizaje de una profesión u oficio. Pero si el reconocido era de los denominados en la época como de dañado y punible ayuntamiento (adulterinos e

¹⁹ Sobre el particular: RODRIGUEZ MORENO, Rafael, "Tratado sobre los derechos de la familia y la defensa del niño". Ediculco, Primera Edición. Bogotá, 1993. p. 230.

incestuosos), quedaban sin protección legal, salvo lo relativo a la obligación alimentaria en cuanto se tratase de alimentos necesarios.

La averiguación de la paternidad solo procedía entonces, en virtud de declaración hecha por el padre ante un juez, en virtud de la citación; no se permitió el ejercicio de una acción para la reclamación de la paternidad.

La Ley 45 de 1936 autorizó en Colombia, por primera vez, la posibilidad de investigar la paternidad por vía judicial y obtener su declaratoria mediante sentencia judicial, bajo unas reglas precisas y unas taxativas causales señaladas en el artículo 4°. La Corte Suprema de Justicia en 1941, dijo que *"el medio subsidiario de obtener la declaración judicial de filiación natural sólo es oportuno cuando el hijo no ha obtenido el reconocimiento expreso y voluntario del padre y tiene que acudir, por ende, a la declaración judicial de paternidad"*²⁰.

La Ley 75 de 1968 reformó para mejorar las causales taxativas por las cuales se podía demandar investigación de paternidad, y señaló como válidas, las siguientes:

- a. Rapto o violación.
- b. Seducción con dolo, abuso de autoridad o promesa de matrimonio.
- C. Confesión inequívoca.
- d. Relaciones sexuales durante la época de la concepción.
- e. Trato personal y social del padre.
- f. Posesión notoria de estado civil.

Como innovación de importancia, la Ley 75 de 1968, en sus artículos 7° y 8°, señaló al juez la necesidad de practicar, a solicitud de parte o por su propia iniciativa, exámenes personales del hijo y sus ascendientes y de terceros, que aparezcan indispensables

²⁰ Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Casación del 28 de junio de 1941, M.P.: Fulgencio Lequerica Y.

para reconocer pericialmente las características heredo-biológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre, y ordenar peritación antro-po-heredo-biológica, con análisis de los grupos y factores sanguíneos, los caracteres patológicos, morfológicos, fisiológicos e intelectuales transmisibles que valorará según su fundamentación y pertinencia.

Se obligó, por cuenta de la misma ley, a los jefes de hospitales, clínicas o casas de salud que reciban a una mujer embarazada, y a los médicos tratantes, para que tomen informes y practiquen exámenes necesarios para establecer la fecha probable de iniciación del embarazo y las características heredo-biológicas de la paciente, a quien indagarán sobre el padre. Igualmente, deberán tomar, luego del nacimiento, los datos de la criatura y la duración de su gestación; todos esos informes deben ser suministrados al juez, quien los tendrá en cuenta en el proceso de investigación de la paternidad.

La práctica de esa prueba pericial, ordenada por los artículos 7° y 8° de la Ley 75 de 1968, era una potestad-deber de los funcionarios judiciales que no podía ser desconocida y que llevaba siempre al operador judicial a ordenar su realización en todos los procesos de esta naturaleza.

Lo importante de la introducción de los dos artículos mencionados en la Ley 75 de 1968 fue la intención del legislador de propender, lo más posible, a la concordancia entre la realidad biológica y los vínculos jurídicos emergentes de esa realidad; todo ello teniendo en cuenta que lo que está en juego en las acciones de paternidad es el presupuesto biológico de la procreación del hijo que es afirmado cuando se lo reclama. En el tiempo de la Ley 75 de 1968, como pruebas biológicas de importancia se encontraban las denominadas hematológicas, cuya característica principal es que los hematíes de la sangre contienen en su superficie ciertas sustancias llamadas antígenos, que permanecen inalterables a lo largo de la vida del sujeto. Dichos antígenos o factores de grupo, presentes en el hijo, deben hallarse también en el padre

o en la madre. Como sistemas sanguíneos existen el denominado ABO, el sistema M y N, el Rhesus y el sistema sanguíneo P.

Estas pruebas hematológicas no sirven para llevar por sí misma a la definitiva conclusión acerca de que efectivamente existe el vínculo de filiación real. Puede sí, esa prueba, crear en el ánimo del juez una fuerte presunción, debido a la gran probabilidad que implica el hecho de que exista concordancia en los diversos sistemas estudiados. Por el contrario, la prueba sí sirve, para determinar la imposibilidad del vínculo real de filiación por incompatibilidad entre los grupos.

La jurisprudencia producida en la época de vigencia de la Ley 75 de 1968, con base en la relatividad de la fuerza probatoria de las pruebas hematológicas, así como la doctrina, consideraron que si bien dichas pruebas son admisibles, solo probaban negativamente, es decir como prueba de no paternidad, si se acreditaba la incompatibilidad de los antígenos sanguíneos entre el hijo y el pretendido progenitor. Se concluyó que la prueba hematológica clásica sirve para descartar el vínculo biológico, pero no para demostrarlo en caso de que tal incompatibilidad no existiere.

En caso de compatibilidad, se hacía necesario completar la prueba para efectos de la declaratoria de paternidad, con otras recabadas en el proceso, generalmente las de carácter testimonial, sin que por ello se excluyera la práctica de cualquier otro medio. Era, pues, necesario acreditar las relaciones íntimas de los presuntos padres, durante el período legal de la concepción regulado por el artículo 92 del C.C., teniendo en cuenta el parto de la madre y la identidad del reclamante de la filiación con el nacido en dicho parto.

Por la calidad de las pruebas biológicas existentes en esa época (hematológicas) y la necesidad de completar la certeza de la paternidad con otras pruebas relativas a las relaciones sexuales para la época en que pudo tener lugar la concepción, entre el

presunto padre y la madre de la criatura que reclama la paternidad, se creó la excepción de pluralidad de relaciones o *exceptio plurium construpratorum*, de la madre durante el período legal de la concepción del hijo, la cual constituía, si se probaba plenamente por parte del demandado, un hecho impeditivo que los operadores judiciales tenían en cuenta para no atribuir la paternidad al presunto padre demandado, presentándose un caso aberrante en que el hijo se quedaba sin padre. Todo ello se repite, en razón de la falta de una prueba biológica de suficiente contundencia probatoria, en la época de la Ley 75 de 1968.

Las pruebas antropomórficas, referentes a la comprobación entre las características físicas del marido, de la madre y del hijo de ésta, abarcan tanto los parecidos o diferencias físicas externas, como de estructuras orgánicas internas, especialmente ciertas particularidades que puedan hallarse en la columna vertebral.

Respecto de las pruebas antropomórficas, decía la jurisprudencia y la doctrina que los rasgos fisonómicos parecidos o común entre el actor y el pretendido padre, si bien pueden constituir un antecedente más en la prueba del nexo biológico, no bastan por sí solos para tener por probada la paternidad.

Dijo la Corte Suprema de Justicia en innumerables fallos que la prueba pericial antropo-heredo-biológica no ha sido consagrada por la ley como motivo autónomo o causal independiente que dé lugar a presumir la paternidad extramatrimonial y, por tanto, a declararla judicialmente con apoyo en este único medio de prueba, sino que requiere de otros elementos persuasivos que conduzcan a establecer cuándo se produjo el trato carnal entre hombre y mujer.

Con el transcurso del tiempo se han ido presentando grandes avances científicos en la producción de la prueba biológica, a tal punto que con la aparición y práctica de pruebas basadas en estudios más complejos, como la prueba HLA (*Human Umphocyte*

Antigen) que se fundamenta en el estudio del complejo mayor de histocompatibilidad, que permite la determinación positiva del nexo biológico de la paternidad (o de la maternidad), se aceptó que el método de tipificación "antígeno-anticuerpo" en tejidos, es idónea para determinar con alto grado de probabilidad la paternidad de quien es demandado como presunto progenitor.

En sentencias del 23 de abril de 1998 y 22 de mayo del mismo año, la Corte Suprema de Justicia estableció la importancia de las pruebas biológicas para la determinación de la paternidad, y señaló la necesidad de su práctica a tal punto que de no hacerlo *"compromete su responsabilidad, como también la comprometen en su caso los entes estatales encargados de su práctica cuando no la realizan o la realizan deficientemente..."*.

De igual forma, la sentencia de la H. Corte Suprema de Justicia del 22 de noviembre de 1999, estando aún en vigencia la Ley 75 de 1968, aceptó en Colombia, la validez de las pruebas biológicas existentes, al considerarlas con fuerza probatoria contundente, por traer una probabilidad de certeza casi exacta en lo relativo a la investigación de paternidad. La Corte Suprema de Justicia expuso en esa sentencia que las pruebas de esa época tienen un peso probatorio superior a las otras probanzas indirectas, como las testimoniales, las cartas o la seducción dolosa; y consideró que si esas pruebas biológicas se realizan a través de los métodos científicos idóneos que con alcance de certidumbre casi absoluta ofrece la ciencia, ellas solas tienen la fuerza suficiente para declarar la paternidad.

La Corte Constitucional, en sentencia del 22 de enero de 1998 señaló que "... la duración de la gestación no es un factor definitivo en la prueba de la filiación..." hizo un análisis completo sobre las pruebas científicas existentes como la de ADN y su fuerza probatoria, con la finalidad de culminar en la sentencia con la declaratoria de inexequibilidad del valor de presunción de derecho contenida en el artículo 92 del C.C.

inciso 2°, referente al establecimiento de la época de la concepción teniendo en cuenta la fecha del nacimiento del actor reclamante de la filiación. Su tenor es el siguiente:

“La duración de la gestación no es ya un factor definitivo en la prueba de la filiación. La filiación, fuera de las demás pruebas aceptadas por la ley civil, se demuestra ahora, principalmente, por el experticio sobre las características heredo-biológicas paralelas entre el hijo y su presunto padre, y por la peritación antro-po-heredo-biológica, medios de prueba expresamente previstos por el artículo 7° de la ley 75 de 1968. Se declarará la inexequibilidad de la expresión “de derecho” contenida en el artículo 92 del Código Civil, y, en consecuencia, la presunción establecida en esta norma será simplemente legal, que admite prueba en contrario. La presunción del artículo 92, en síntesis, es la base de diversas normas del Código Civil relacionadas con la familia o con el parentesco. Como presunción simplemente legal, que admite prueba en contrario, en nada vulnera la Constitución. Es claro que si se abre la posibilidad de desvirtuarla, por medio de las pruebas pertinentes, ella no constituirá en adelante un obstáculo insalvable e injusto para las pretensiones de algunos. Todas las normas que se refieran directa o indirectamente a la presunción del artículo 92, deberán interpretarse teniendo en cuenta que ésta es simplemente legal y no de derecho, y que, por consiguiente, es admisible la prueba en contrario”²¹.

La misma Corte Constitucional, señaló que en virtud de la importancia de la prueba biológica, por los avances de la ciencia en ese aspecto, se hace obligatorio la práctica

²¹ Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 1998. FILIACIÓN – Medios de Prueba

de la prueba por parte del ICBF y además impone que la institución las haga de manera oportuna, es decir dentro de períodos razonables de tiempo.

De igual manera, la jurisprudencia del país consideró que la excepción de pluralidad de relaciones de la madre para la época de la concepción podía definirse con claridad mediante la práctica de las pruebas científicas, las que definirían en forma efectiva quién es el verdadero padre.

Una vasta jurisprudencia²² apuntaba a la fundamentalidad e la prueba biológica en los términos que a continuación se citan:

“El dictamen pericial hoy no sólo permite excluir sino incluir con grado cercano a la certeza absoluta, a quien es demandado como padre presunto. De la prueba crítica, en la que el razonamiento legislativo para inferir la paternidad y autorizar a declararla judicialmente recorre varios caminos (el hecho conocido y probado -v.gr. el trato especial entre la pareja-, el hecho inferido -las relaciones sexuales- y el segundo hecho inferido -la paternidad) se pasa hoy, con ayuda de la ciencia, a una prueba de los hechos, científica, cual es la de excluir a alguien como padre o la de incluirlo con grado de certeza prácticamente absoluta, mediante análisis y procedimientos técnicos avalados mundialmente y tomados en el estado presente como ciertos e indubitables. Se pasa hoy casi directamente al fin último de las presunciones legales que contempla la ley 75 de 1968; declarar la paternidad o desestimarla.

“(…)

²² Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2001. PROCESO DE FILIACION

“Pero debe, en primera medida, asumir que en la investigación de la paternidad, la ciencia actual -a la que debe acudir no sólo en virtud de lo previsto en el artículo 7 de la ley 75 de 1968 sino con miras en la búsqueda histórica que debe esclarecer-, le presta tal apoyo a su veredicto, que se constituye en pilar de su sentencia. Obvio resulta reiterar que el dictamen científico deberá reunir esos requisitos de idoneidad a que se refiere el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil, a efectos de ser apreciado cabalmente en la solución del conflicto, lo que por lo demás, supone en el juez la adquisición de un conocimiento basilar sobre esa ciencia (en este caso la genética) que le permita con algún grado de fluidez conceptual analizar críticamente el dictamen y no, como suele acontecer, remitirse sin más al porcentaje que los expertos y laboratorios incluyen en el dictamen pericial, sin aludir cómo lo obtuvieron, por qué no es superior, qué otro examen ha de practicarse para llegar a mejores niveles de certidumbre, etc.

“(…)

“No se trata acá de desechar de un tajo las pruebas testimoniales o documentales recaudadas y que den cuenta, a criterio del juzgador, del trato íntimo o especial que una pareja se prodiga en una época predeterminada y coincidente con la concepción, para de allí inferir las relaciones sexuales que dieron origen a un ser humano cuya paternidad se investiga. No. Se trata de resaltar, con la altura exacta a la que llega hoy la ciencia, que los avances de ésta, a pesar de no estar recogidos positiva o expresamente en la ley, no pueden echarse de menos, cuando es lo cierto que las meras conjeturas e inferencias, por virtud de la ciencia se puede pasar hoy a una prueba menos indirecta de la filiación, prueba que, por lo demás, es de obligatoria práctica, según las voces del artículo 7 de la ley

75 de 1968, que por cierto no contempla la práctica que acá sembró la duda, referida a la posible paternidad de un tercero, distinto del demandado. Es decir, se impone hoy la declaración de ciencia frente a la reconstrucción histórica, salvo que aquella no sea posible obtener. (subrayado en el texto original)

“(…)

“Es imperioso que los jueces que a su cargo tienen la delicada función de declarar la paternidad o negarla, adviertan y tomen plena conciencia de que más que las meras presunciones de paternidad que la ley recogió como medio facilitador para la demostración de las relaciones sexuales, hoy la ciencia ofrece un camino expedito que salta sobre esas otrora necesarias relaciones sexuales. Ya sin sorpresa se registran en la actualidad procedimientos científicos que, por ejemplo, substituyen la relación sexual y consiguen la fertilización del óvulo femenino, por lo que el juez, atento como debe estar a los cambios de su tiempo, debe darle apenas una discreta importancia a las probanzas indirectas que tienden con la imperfección que les son propias, a demostrar la relación sexual y por este camino la paternidad biológica inferida. En cambio, debe el juez, en la medida en que sea posible obtenerla, aquilatar la prueba científica teniendo presentes, como antes se dijo, la pertinencia, erudición de los peritos, comprensión del tema, precisión de las respuestas, apoyo científico que utiliza, etc.

“Se reitera, hoy es posible destacar que esas probanzas indirectas (testimonios, cartas, seducción dolosa) no tienen el peso probatorio de las pruebas biológicas. Porque la paternidad biológica, esto es, la posibilidad de que un gameto femenino haya sido fecundado por uno de determinado

*hombre (y al margen de consideraciones éticas o de procedimientos en que no cuente la voluntad del padre biológico, tópicos que la Corte no entra en esta oportunidad a analizar), es hoy posible demostrarla con alcances de certidumbre casi absoluta, mediante procedimientos que el medio científico colombiano ofrece y que distan hoy mucho de los que el legislador de 1968 pudo tener en mente.*²³

Con los avances científicos logrados al transcurrir el tiempo, el legislador consideró necesario adecuar las normas a los tiempos modernos y expidió la Ley 721 de 2001, la que modificó la Ley 75 de 1968 en algunos aspectos, así como el Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor.

Esta ley, que empezó a regir el 29 de diciembre de 2001, estableció como obligatoria la prueba pericial con técnica de ADN, mientras no existan otras que "ofrezcan mejores posibilidades" para alcanzar "el porcentaje de certeza", la que debe ser decretada de oficio o a solicitud de parte. Si el resultado de compatibilidad es del 99.9%, debe proferirse inmediatamente la sentencia que declara la paternidad. Para efectos de la ordenación, práctica, contradicción y valoración de la experticia, se siguen las reglas contenidas para ese medio en el estatuto procesal civil.

El costo de la primera prueba en principio debe asumirlo el Estado, quien las realizará directamente o a través de laboratorios públicos o privados debidamente acreditados y certificados; luego, al momento de la condena en costas, se determinará a quién corresponde pagarla. Es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la entidad encargada de contratar la realización de las pruebas de ADN. La segunda prueba, que debe ordenarse en caso de objeción a la pericia, debe ser sufragada por quien objetó la prueba, a menos que solicite amparo de pobreza, caso en el cual la costeará el Estado.

²³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, expediente Nro. 6188, M.P., Jorge Santos Ballesteros

Estableció también la ley que:

Los laboratorios legalmente autorizados para la práctica de estas experticias deberán estar certificados por autoridad competente y de conformidad con los estándares internacionales.

La ley estableció que sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente. El artículo 3° dice así: Artículo 3°. *“Sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente”.*

Ello significa que si se presenta el caso en que exista renuencia del presunto padre demandado para la práctica de la prueba a pesar de haber utilizado el funcionario judicial todos los mecanismos compulsivos para obtener la realización de ella, deberá procederse a continuación con la ordenación probatoria como etapa procesal a efectos de verificar si con la utilización de los otros medios probatorios existente, se puede declarar en sentencia la paternidad reclamada y no lograda a través del examen biológico.

La interpretación anterior fue realizada por la Corte Constitucional en sentencia C-476 de 2005, y se hizo sobre el párrafo primero del artículo 8° de la Ley 721 de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:

Señaló la Corte Constitucional que al hacer una interpretación sistemática para armonizar el párrafo primero del artículo 8° con el artículo 3°, obliga a regresar al artículo 3° en caso de renuencia del demandado para la práctica y decretar período

probatorio para verificar por otros medios la paternidad y continuar con el trámite del proceso hasta llegar a la sentencia.

No es posible, pues, como lo informa el tenor literal del párrafo primero del artículo 8° de la Ley 721 de 2001, que el juez, sin más trámite, proceda a dictar sentencia que declara la paternidad, cuando exista renuencia del demandado para la practica del examen.

El derecho del hijo a conocer su verdadera identidad debe estar por encima del derecho de resguardar el presunto padre su intimidad, ello por una ponderación de derechos fundamentales en conflicto, ante lo cual se establece que el derecho a la verdadera identidad está por encima del derecho a la intimidad, que únicamente recae en la esfera individual, mas el primero tiene un carácter de "orden público".

Se ha sostenido que la toma de la muestra sanguínea no debe considerarse violatoria de derechos fundamentales como la integridad personal o el derecho a la intimidad, cuando se trate de procesos para la averiguación de la paternidad, porque en estos casos debe primar el interés colectivo de la sociedad, referente a la verificación del estado civil del ciudadano.

Es la propia ley la que impone la realización de la prueba biológica, lo que implica que ella debe realizarse cuando sea indispensable para alcanzar los fines constitucionales perseguidos por ese interés general.

De otro lado, la misma sentencia señaló que la prueba científica no puede considerarse en forma absoluta como única y sin posibilidades de error para determinar la paternidad, sino que en las pruebas con resultados de un índice de probabilidad superior a un 99.9% existe una posibilidad de error que puede ser completada con otras

pruebas, ya que no ofrecen un 100% de certeza, con lo que se deja al operador judicial la autonomía en la valoración de la prueba.

La implantación como obligatoria de la prueba biológica implica considerar que las causales o presunciones establecidas en la Ley 75 de 1968, requeridas en forma taxativa para reclamar paternidad, pasan a un segundo plano, para sólo tenerlas en cuenta en los casos de imposibilidad de practicar la prueba científica.

Se requeriría, en consecuencia, a raíz de la interpretación que de la ley hizo la Corte Constitucional, que en la demanda respectiva, en forma supletoria, se señalara como causal alguna de las presunciones contempladas en el artículo 6° de dicha Ley 75 de 1968, para que, en caso de que se presente renuencia del presunto padre a la práctica del examen o por cualquier otra razón no se practique la misma, sea posible en virtud del principio de la congruencia proferir la sentencia correspondiente.

En el año 2006, el día 26 de julio, se expidió la Ley 1060, con la finalidad de modificar las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad. Esta ley, siguiendo la nueva tendencia en nuestro país, fundamentó la necesidad de la verdad real de la filiación, sobre la base de las pruebas biológicas, al centrar toda la regulación de la impugnación de la paternidad o de la maternidad, sobre la necesidad de la peritación científica a efectos de buscar y obtener una verdadera filiación.

Se cambió totalmente e, del sistema de respeto a la paternidad obtenida por vías diferentes a la verificación científica, y la protección del hijo sobre esa filiación así obtenida, situación que entregaba una seguridad jurídica al reconocido o declarado padre, para pasar al sistema de verificación científica de la filiación, utilizando los avances tecnológicos existentes en la actualidad y los que en el futuro se logren.

2.2. La valoración de la prueba científica en el reconocimiento de la paternidad²⁴

En este acápite resulta importante partir de la base de lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad, sobre el análisis hecho en la Ley 721. La posición de la corporación se enmarcó en determinar que:

“el dictamen pericial a que se refiere la Ley 721 de 2001 se encuentra sometido, como cualquier otro, a las formalidades y a los requisitos de fondo exigidos por la ley y rige respecto del mismo el derecho de contradicción y la necesidad de la publicidad de la prueba, sin los cuales carece de validez. En tal virtud podrán las partes discutir, desde el principio, la idoneidad científica de quienes practiquen la prueba lo que incluye no solo a los profesionales sino a los laboratorios que actúen en la toma de las muestras que se requieran tanto respecto del padre presunto, de la mujer que se dice ser la madre, como del hijo cuya filiación se investigue y, cuando fuere el caso, de los parientes de estos e inclusive, podrá discutirse a cerca de estos y otros asuntos cuando hubiere necesidad de la exhumación de un cadáver para la práctica de tales exámenes. De igual manera, podrán las partes ejercer el derecho de recusar a los peritos cuando exista causal para ello y no se declaren impedidos; producido el dictamen, el juez tendrá el deber de ponerlo en su conocimiento para que puedan las partes pedir aclaración o complementación o, si fuere el caso, tacharlo por error grave. Será el juez entonces el que decida sobre tales solicitudes o sobre la impugnación de que fuere objeto el dictamen. Si opta por aceptar la tacha que se le formule, en ejercicio de sus atribuciones como director del proceso será de su

²⁴ Sobre el particular: BUENO RINCON, Fabio Enrique, "La investigación de la filiación y las pruebas biológicas". Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Segunda Edición. Bogotá, 1996, p. 132.

competencia ordenar que se practique de nuevo y por distintos peritos la prueba científica a que se ha hecho alusión en los procesos de filiación. Es decir, que por este aspecto tampoco puede afirmarse que desde el punto de vista constitucional se vulnere con esta prueba el derecho al debido proceso judicial”.

La prueba pericial es el medio idóneo para la práctica de las pruebas biológicas con la técnica de ADN, prueba que debe, en todo momento, seguir las pautas contempladas para su ejercicio en el Código de Procedimiento Civil.

No obstante lo anterior, es bueno hacer notar que, en lo que respecta a la calidad del perito y a los requisitos mínimos que debe contener la experticia, no se deja a la libre designación del funcionario judicial, sino que la ley regula estos aspectos y limita su ordenación, al exigir que sólo pueden ser laboratorios debidamente certificados y acreditados por el Estado, según lo ordena el artículo 7° párrafo primero de la Ley 721 de 2001, en concordancia con el párrafo tercero del mismo artículo. El gobierno, en virtud de las facultades otorgadas por la Ley 721, expidió el Decreto 1562 del 24 de julio de 2002, "por el cual se reglamenta el funcionamiento de la comisión de acreditación y vigilancia de los laboratorios que practican las pruebas de paternidad o maternidad con marcadores genéticos de ADN y se dictan otras disposiciones" y el Decreto 2112 del 29 de julio de 2003, "por el cual se reglamenta la acreditación y certificación de los laboratorios públicos y privados que practican pruebas de paternidad o maternidad con marcadores genéticos de ADN y se dictan otras disposiciones".

A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, expidió el Acuerdo No. PSAA07-4024 del 24 de abril de 2007, por medio del cual se regula la solicitud de la prueba del ADN en los procesos de Filiación. Ahora en lo que tiene que ver con la valoración a realizar por el juez de la prueba pericial científica, no cabe duda de que

existe una diferencia entre la interpretación científica de las pruebas biológicas de paternidad y la interpretación jurídica que sobre las mismas debe realizar el funcionario judicial.

El informe científico se presenta ante el juez como un estudio de ciencia, aplicando para ello, las técnicas aceptadas en el ámbito general e internacional, que ofrezcan la mayor garantía de certeza, seguridad y confiabilidad. Corresponde al funcionario judicial calificar y valorar ese informe presentado, a fin de definir una controversia entre ciudadanos, verificando el cumplimiento de los requisitos básicos en la realización de la prueba, así como la idoneidad en todo el procedimiento desde la toma de la muestra hasta la entrega del informe.

Es de tal impacto la categoría superior en comparación con los otros medios de prueba, que tiene el informe científico y que ratifica la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, en el sentido de que los avances científicos han llegado a tal punto de certeza, que ellos por sí mismos son suficientes para la determinación de la paternidad con un alto grado de certeza que hace inoficioso, en muchos casos, la práctica de otras pruebas judiciales, tendientes a la verificación de hechos indirectos de averiguación de la paternidad.

Los Juzgados Seccionales han aceptado la trascendencia de la prueba genética en los siguientes términos:

“En sentencia C- 04 de Enero 22 de 1998 de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declaró la inexequibilidad de la expresión “de derecho” contenida en el artículo 92 del código Civil, y en consecuencia la presunción establecida en esta norma se convirtió en presunción simplemente legal, que admite prueba en contrario, y precisó:

“Para la ciencia y en particular para la genética molecular, tanto la negación como la afirmación de la paternidad son inobjetables en el momento actual, lo que hace innecesario apelar a las nociones de tiempo en que pudo ocurrir la concepción con las imprecisiones que le son propias...”

“Dicho en otros términos: la duración de la gestación no es ya un factor definitivo en la prueba de la filiación.

La filiación fuera de las demás pruebas aceptadas por la ley civil, se demuestra ahora, principalmente, por el experticio sobre las características heredo -biológicas practicado entre el hijo y su presunto padre, y por la peritación antropo – heredo – biológica, medios de prueba expresamente previstos por el artículo 7 de la ley 75 de 1968.”²⁵

El Juez, al observar las conclusiones (científicas) del dictamen, deberá comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar y sobre ello se reitera, que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta.

²⁵ Juzgado Segundo de Familia de Calarcá, Quindío, Sentencias: SENTENCIA NÚMERO 236EXPEDIENTE 2009-00344-00 Septiembre veintiuno (21) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO 231EXPEDIENTE 2009-00235-00 Septiembre catorce (14) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO EXPEDIENTE 2009-00167-00 Agosto trece (13) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO 171EXPEDIENTE 2009-00196-00 Julio veinticuatro (24) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO 163EXPEDIENTE 2009-00130-00 Julio veintidós (22) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO 164EXPEDIENTE 2009-00090-00 Julio veintidós (22) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO 165 EXPEDIENTE 2008-00618 -00 Julio veintidós (22) de dos mil nueve (2009)

No se le puede pedir al Juez que posea una ciencia igual o superior a la del científico (que sería lo ideal para que pudiera realizar por su cuenta la cabal evaluación efectuada por aquél), por lo que el control de la prueba, como ya se esbozó en anotación anterior, se realizará mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito de la referida prueba.-Deberá también tener en cuenta el juez que ella (la prueba), no traspase los valores superiores que han de preservarse, como que sea lícita, que no colisione con patrones éticos, que no vaya contra las buenas costumbres, la dignidad de la persona u otros derechos fundamentales.

2.3. Importancia de la prueba científica

La importancia de la prueba científica reside en su alto grado de confiabilidad. Si se realiza en condiciones empíricas óptimas y utilizando métodos científicamente adecuados, se puede decir que sus resultados, en la mayoría de los casos, son incuestionablemente verdaderos. Si, por el contrario, el método o técnica utilizados y/o las condiciones de realización no son las apropiadas, el grado de fiabilidad de la prueba disminuye hasta llegar incluso a perder totalmente su valor.

La validez de una prueba científica y la confianza en sus resultados, no puede determinarse y aceptarse por el juez, por el solo hecho de su aportación por el perito científico, sino que debe el juez analizar su validez científica dependiendo del método utilizado, de que se haya usado la tecnología apropiada y de que se hayan aplicado rigurosos controles de calidad.

Es pertinente que el juez, para verificar la validez y Habilidad de los resultados, la reconstruya a través de sus diferentes etapas o pasos, así: a) recogida de muestras; b)

análisis en el laboratorio para comparar los perfiles genéticos; c) valoración probabilística de resultados y d) emisión del informe final.

Dependerá también la validez de la prueba de su correcta realización, por personal calificado, siguiendo los protocolos correctos y prestando atención escrupulosa a las técnicas de asepsia para evitar las contradicciones durante el trabajo.

La regla para el operador judicial es "cuanto mayor expectativa de valor probatorio tiene una prueba, más rigurosos deben ser los controles de realización de la misma".

De otro lado, cuando el resultado es de alta probabilidad al comparar los perfiles genéticos, es necesario valorar aún más esa coincidencia, con la probabilidad de que el vestigio analizado provenga de ese individuo, lo que dependerá del porcentaje de individuos de la población general que presentan ese perfil genético (o ese riesgo del fenotipo). Ello explica la intensa labor de genética poblacional que se realiza en los laboratorios.

La valoración de coincidencias debe hacerse mediante un análisis matemático estadístico, habida cuenta de la frecuencia con la que el perfil genético (o el rasgo del fenotipo) identificado se presenta en la población general.

CAPÍTULO III VISIONES SOBRE EL DERECHO A LA PATERNIDAD

1. Primera visión

Para el derecho, la paternidad posee un estatuto natural, uno económico y uno jurídico. Natural porque biológicamente todo ser tiene padre y es producto de la unión de dos células procedentes de un hombre y una mujer. Sobre esto no hay discusión; el asunto se complica un poco al tener en cuenta que, si bien la maternidad es susceptible de prueba directa porque hace parte de un hecho: el alumbramiento, la paternidad requiere contar con Inferencias y presunciones, como la existencia de cohabitación, relación sexual y aparte de eso, fidelidad en la mujer. Pero, la llegada de un niño va más allá de ser un acontecimiento biológico y familiar, Implica un nacimiento para el Estado, el nacimiento de una persona jurídica, lo cual tiene consecuencias que se materializan en DERECHOS Y DEBERES²⁶.

Es aquí donde un asunto natural empieza a ser objeto de legislación, con el fin de regular los alcances y límites del vínculo entre padres e hijos. El tercer estatuto, el económico, corresponde a que los padres deben atender obligaciones como cubrir las necesidades económicas de la crianza y educación de sus hijos, lo cual posibilita el que esos nuevos ciudadanos lleguen a ser personas de bien. A su vez, éstos reciben como legado los bienes de sus padres cuando mueren.

En estos términos la paternidad remite a una filiación: la calidad que el hijo tiene con respecto a su padre o madre, en relación con las circunstancias de la concepción y el estado civil de los progenitores. Aquí se habla de actos y hechos concretos, visibles o

²⁶ Sobre el particular: TRILLOS, María Teresa. “*La filiación de la legalidad a la responsabilidad*” <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/affectiosocietatis/article/viewFile/5436/4789>, abril 15 de 2011.

que se pueden inferir, frente a los cuales un sujeto está en capacidad de responder en términos Como: "Lo hice, si estuve allí, es mi hijo, etc.". Además, es necesario que este asunto sea regulado con miras a mantener un orden social y así cada uno pueda calcular los límites y consecuencias de su acto.

2. Segunda visión

La Corte le da carácter de derecho fundamental a la filiación, porque la liga de manera invariable al estado civil que es uno de los atributos de la personalidad. Como consecuencia de lo anterior, instituye la filiación como uno de estos. Al ser atributo de la personalidad, se convierte en un derecho fundamental pues el artículo 14 de la constitución política establece "Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica".

3. Tercera visión

Explica la Corte, que las presunciones de paternidad y el carácter restrictivo de la manera de impugnarlas, se justifican por ser una forma de protección a la familia constituida por vínculos legales pues se considera el núcleo fundamental de la sociedad. Así se sopesan dos principios constitucionales: la protección a la honra del matrimonio y el derecho a establecer la verdadera filiación para finalizar diciendo que ninguna regulación legal puede desconocer el núcleo esencial del derecho de las personas a establecer su verdadera filiación.

4. Cuarta Visión

El estudio del ADN –que ha ganado bastante popularidad con el caso Emmanuel-, es la prueba reina para declarar paternidad o maternidad. Tomando una muestra de sangre o mucosa bucal del grupo familiar, el laboratorio contratado por el ICBF para practicar la

prueba, luego de verificar el protocolo procesal y científico pertinente, procederá a su estudio genético para rendir el informe científico al Juez que conoce del proceso, lo que resultará fundamental para la declaratoria o exclusión del parentesco. Únicamente en aquellos casos en que sea absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se podrá recurrir a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo que competa.

Aunque nuestro sistema judicial cuenta con los medios procesales y científicos para esclarecer la filiación, la demora injustificada en la práctica y rendición del informe de estas pruebas es un obstáculo deprimente para la justicia, pues muchos de quienes eran niños al presentar la demanda se han convertido en adultos sin que aun se les hubiere citado siquiera para la práctica de la prueba de ADN, perdiendo gran parte de su vocación para pedir alimentos, y la esperanza de hacer valer su derecho fundamental frente a la sociedad a llevar un nombre, y a la igualdad. El caso Emmanuel demuestra que estas pruebas se pueden practicar de manera oportuna y expedita, lo que se debe hacer sin distingo de clase o condición que pueda repercutir de manera injusta en una espera eterna. Las entidades responsables de contratar, decretar y practicar la prueba tienen la palabra.

¿Garantiza el Estado colombiano la efectividad de las acciones judiciales creadas en favor de quienes no gozan del derecho a reclamar su verdadera filiación?

CONCLUSIONES

El hombre como ser humano, está regido por leyes que desde el inicio de su existencia, determinan su comportamiento.

Esas leyes son, entre otras: leyes naturales, en razón a su existencia biológica; leyes económicas y leyes jurídicas que regulan su comportamiento, ordenando sus relaciones sociales en torno a la protección de sus derechos fundamentales y que le permiten identificarse como ser único, investido de una dignidad que lo diferencia de los demás congéneres.

El hombre, como miembro de una familia basada en el matrimonio o en la unión permanente de un varón y una mujer, está sujeto a normas que imponen correlativamente entre padres e hijos; deberes, que si se cumplen, irán siempre en fortalecimiento y mantenimiento de la institución tradicional de la familia como núcleo fundamental y primordial de la sociedad. Como tal, la familia debe recibir la protección y asistencia necesarias para cumplir con su cometido dentro del grupo social. De igual manera, los niños que forman parte de ese grupo familiar, tienen derechos que su mismo núcleo y el Estado, están obligados a proteger.

Los niños tienen el derecho intrínseco a la vida y, el Estado, debe propender por el cumplimiento de las normas, que le permitan su supervivencia y desarrollo.

Como tales, éstos, tienen derecho a un nombre, a su nacionalidad, a conocer sus padres y a recibir de parte de ellos los cuidados necesarios que contribuyan a su desarrollo físico, mental, espiritual, social y moral. Es decir, un desarrollo integral que les permita integrarse al grupo social como hombres de bien.

El estado a través de las leyes, determina el parentesco entre los niños y sus padres y, esta vinculación, genera deberes y derechos que no siempre se cumplen, por factores de diversa índole.

No obstante existir normas que regulan lo relacionado con los vínculos que unen a padres e hijos, si los lazos naturales entre ellos no son fuertes y armónicos, habrá permanentemente dificultad para su establecimiento o para el cumplimiento- una vez que se ha establecido el parentesco- de las obligaciones o deberes que de ellos se derivan

Por lo anterior, Todos los NNA Colombianos tienen derecho a tener una familia y no ser separados de ella, a tener un ambiente sano, saber su verdadera filiación y reconocimiento de paternidad y maternidad de manera legal conforme a su composición biológica y su árbol genealógico, los derechos de los NNA prevalecerán , el principio de corresponsabilidad consignado en la Ley de Infancia y Adolescencia es fundamental (La Familia, La sociedad y el estado) son accionantes con un papel en cada situación particular y desde la perspectiva de géneros. En aras de fundar las acciones legales y su efectividad en el reconocimiento de paternidad, utilizando los medios legales y la práctica tecnológica para atender la filiación natural de nuestro NNA la alta vulnerabilidad en el tema de filiación natural.

Todos los servidores públicos investidos para defender los derechos de los niños, niños y adolescentes como comisarios, defensores de familia, jueces de la república y en general todos los ciudadanos colombianos debemos agotar todas las instancias judiciales al hacer prevalecer sus derechos “Erga Omnes” para todo el mundo.

Utilizando alternativas como:

1. Promover y promocionar los derechos de filiación que tienen los ciudadanos para acudir a su reclamación ante las instancias judiciales que trabajan por la garantía, restablecimiento y protección de los derechos en Colombia
2. Que las instituciones competentes, divulguen ante la comunidad el conocimiento oportuno y eficaz, de cómo actuar ante situaciones como las presentadas en este ensayo.
3. Recomendar a las personas con dudosa paternidad biológica, la práctica de las acciones legales consignadas en la siguiente investigación metodológica , atendiendo la tecnología como (las pruebas de ADN) por sus confiables resultados de un 99.99%, la normativa vigente y los procesos informativos, de resultados y muestreos en lo referente al reconocimiento de paternidad VOLUNTARIA, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.
4. Que los profesionales que hacen parte del SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR, de otras áreas afines al derecho como: la tecnología, la salud y la ciencia, estudien, investiguen y se actualicen sobre todo lo concerniente a las acciones legales que ofrece el estado colombiano en defensa de la filiación de los Niños, Niñas y Adolescentes, para que sus resultados sean mucho más certeros y confiables en la resolución de los conflictos referentes a INVESTIGACION DE PATERNIDAD, IMPUGNACION DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD, FILIACION EXTRAMATRIMONIAL, RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO MEDIANTE PRUEBA DE ADN POR MUTUO ACUERDO.

BIBLIOGRAFÍA

BENJUMEA, Jairo. “*Derecho de Familia. Módulo de Filiación*” <http://docs.google.com/viewer>, abril 15 de 2011.

BUENO RINCON, Fabio Enrique, "La investigación de la filiación y las pruebas biológicas". Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Segunda Edición. Bogotá, 1996, p. 132.

CABELLO BLANCO. Margarita “Filiación y valoración probatoria de las pruebas de ADN” XXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Universidad Libre, Bogotá. 2007.

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-109 de 1995. DERECHO A LA PERSONALIDAD JURÍDICA – Filiación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Casación de marzo 28 de 1996, M.P.: Rafael Romero Sierra

Corte Constitucional. Sentencia C-595 de 1996. FAMILIA – Clasificación

Corte Constitucional. Sentencia C-156 de 1993.

Corte Constitucional, Sentencia C-145 de 2010. FAMILIA EN LA CONSTITUCION POLITICA VIGENTE-Tratamiento y reconocimiento

Corte Constitucional, Sentencia C-1064 de 2000. ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Protección del menor

Corte Constitucional. Sentencia C-145 de 2010.

Corte Constitucional, Sentencias T-531 de 1992, T-041 de 1996 y C-997 de 2004.

Corte Constitucional, Sentencia C-476 de 2005. DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA – Guarda estrecha relación con el derecho a la igualdad.

Corte Suprema de Justicia, Sentencia de Casación del 28 de junio de 1941, M.P.: Fulgencio Lequerica Y.

Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 1998. FILIACIÓN – Medios de Prueba

Corte Constitucional, Sentencia T-183 de 2001. PROCESO DE FILIACION

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, expediente Nro. 6188, M.P., Jorge Santos Ballesteros

GALINDO GARFIAS, Ignacio. “*Estudios de Derecho Civil*” Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. 1981. p. 10

IBAÑEZ OTÁLORA, María Fernanda y JIMENEZ FANDIÑO, Sara. “*La filiación en la Jurisprudencia Constitucional*” Universidad Javeriana de Colombia, Bogotá, 2003.

Juzgado Segundo de Familia de Calarcá, Quindío, Sentencias: *SENTENCIA NÚMERO 236EXPEDIENTE 2009-00344-00 Septiembre veintiuno (21) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO 231EXPEDIENTE 2009-00235-00 Septiembre catorce (14) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO EXPEDIENTE 2009-00167-00 Agosto trece (13) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO 171EXPEDIENTE 2009-00196-00 Julio veinticuatro (24) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO*

163EXPEDIENTE 2009-00130-00 Julio veintidós (22) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO 164EXPEDIENTE 2009-00090-00 Julio veintidós (22) de dos mil nueve (2009). SENTENCIA NÚMERO 165 EXPEDIENTE 2008-00618 -00 Julio veintidós (22) de dos mil nueve (2009)

RODRIGUEZ MORENO, Rafael, "Tratado sobre los derechos de la familia y la defensa del niño". Ediculco, Primera Edición. Bogotá, 1993. p. 230.

TRILLOS, María Teresa. "La filiación de la legalidad a la responsabilidad" <http://aprendeonline.udea.edu.co/revistas/index.php/affectiosocietatis/article/viewFile/5436/4789>, abril 15 de 2011.